

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 59**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 2 DE JUNIO DE 2015**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del martes dos de junio de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Eduardo Medina Mora I. no asistió a la sesión previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cincuenta y ocho ordinaria, celebrada el lunes primero de junio del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes dos de junio de dos mil quince:

**I. 12/2015**

Contradicción de tesis 12/2015, suscitada entre los Tribunales Colegiados Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Vigésimo Segundo Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver, respectivamente, las quejas 13/2014, 121/2013 y 129/2014. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis. SEGUNDO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del apartado cuarto de esta resolución. TERCERO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último apartado de este fallo. CUARTO. Dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, en los términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.”* La tesis a que hace referencia el punto resolutivo tercero tiene por rubro: *“RECURSO DE QUEJA. RESULTA IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL UN JUEZ DE DISTRITO NIEGA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE ACUMULAR LOS AUTOS DE DOS O MÁS JUICIOS DE AMPARO.”*

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del asunto. Precisó que el tema a dilucidar consiste en determinar si el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente procede en contra de la resolución que niegue dar trámite a la acumulación de autos en el juicio de amparo indirecto. Señaló que, por una parte, los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Segundo Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, si bien no se pronunciaron expresamente sobre la procedencia del recurso de queja, consideraron que las mismas eran fundadas, por lo que implícitamente estimaron que la queja es procedente en contra de la resolución que desestima tramitar la acumulación y, por otra parte, el Tribunal Colegiado Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que es improcedente el recurso de queja en contra de la resolución que niega tramitar la solicitud de acumulación de juicios de amparo indirecto, ya que no constituye una determinación trascendental y grave, pues su sola emisión no causa daño o perjuicio irreparable en el fallo definitivo, además de que, de no acumularse los juicios, las partes no pierden el derecho de combatir las sentencias respectivas.

El proyecto propone que prevalezca jurisprudencia en el sentido de que es improcedente el recurso de queja en contra de la resolución que decide no dar trámite a la solicitud de acumulación de juicios de amparo indirecto, pues debe reservarse al juez de distrito la facultad discrecional

alusiva, en la inteligencia de que esa resolución no tiene el carácter de trascendental ni grave, en razón de que no produce una afectación de imposible reparación en sentencia definitiva, puesto que, en caso de sentencias contradictorias, existe el recurso de revisión con el que el tribunal colegiado que conozca puede reparar el daño, sea ordenando la reposición del procedimiento o sea que resuelva en la sentencia correspondiente los problemas suscitados en primera instancia constitucional. Propuso someter a la valoración del Tribunal Pleno los apartados procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite y a la competencia y a la legitimación.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz anunció que votaría en contra de la competencia, como en otras ocasiones, por las razones conocidas.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I y II relativos, respectivamente, a los antecedentes y al trámite, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado III, relativo a la competencia y a la legitimación, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz en contra por lo que se refiere a la competencia, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del apartado IV, relativo a la existencia de la contradicción. El proyecto propone la existencia de la contradicción y propone la pregunta ¿es procedente el recurso de queja en contra de la resolución que niega dar trámite al incidente de acumulación de autos, al ser una resolución de naturaleza trascendental y grave que ocasiona un perjuicio no reparable en sentencia definitiva?

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado IV, relativo a la existencia de la contradicción, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del apartado V, relativo al criterio que debe

prevalecer. El proyecto propone establecer la jurisprudencia de rubro: *“RECURSO DE QUEJA. RESULTA IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL UN JUEZ DE DISTRITO NIEGA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE ACUMULAR LOS AUTOS DE DOS O MÁS JUICIOS DE AMPARO.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo al criterio que debe prevalecer, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

## **II. 21/2015**

Contradicción de tesis 21/2015, suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto del Centro Auxiliar de la Tercera Región, Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Primero del Vigésimo Segundo Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver, respectivamente, el amparo en revisión 499/2014, el conflicto competencial 30/2013 y las quejas 121/2013 y 129/2014. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón

Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis. SEGUNDO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del apartado cuarto de esta resolución. TERCERO. Queda sin materia la contradicción de tesis denunciada.”*

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del asunto. Precisó que, dadas las resoluciones respectivas a las contradicciones de tesis 27/2015 y 12/2015, los temas de la presente contradicción han sido completamente resueltos, por lo que el proyecto propone declarar que existe la contradicción pero queda sin materia. Adelantó que votará en contra de la competencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del proyecto, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz en contra por lo que se refiere a la competencia, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

### III. 39/2013

Acción de inconstitucionalidad 39/2013, promovida por diversos diputados integrantes del Congreso del Estado de Aguascalientes, demandando la invalidez del Decreto 428 que reforma el párrafo segundo del artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de noviembre de dos mil trece. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto Número 428 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el treinta de enero de dos mil ocho. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del asunto y propuso someter a la valoración del Tribunal Pleno los considerandos procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a la delimitación de los actos impugnados.

El señor Ministro Pérez Dayán sugirió que, en el considerando primero, debería referirse al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, no a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

La señora Ministra Luna Ramos modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero (modificado), segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a la delimitación de los actos impugnados, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia. El proyecto propone declarar infundada la causa aducida por la Presidenta del Congreso del Estado, consistente en que los diputados promueven esta acción a título cuasi personal; en razón de que, si bien es cierto que se refieren a los derechos de los diputados, combaten una disposición de carácter general expedida por el propio Congreso del Estado, además de que cita una tesis de este

Tribunal Pleno para determinar que el reglamento en cuestión puede impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra Luna Ramos realizó la presentación del considerando sexto, relativo a la presunta violación al principio de legalidad. El proyecto propone desvirtuar el concepto de invalidez esgrimido en el sentido de que, al no estar fundados ni motivados los actos reclamados, existe una violación de carácter formal relacionada con el principio de legalidad del artículo 16 constitucional; en razón de que, a partir de la jurisprudencia de rubro *“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.”*, el Congreso estatal tiene facultades para legislar en la materia, además de que la organización interna del órgano legislativo es un aspecto que amerita ser regulado, lo que concretó con el artículo 12 del reglamento en combate. Por otro lado, se señala que la creación de comisiones supone el principio de división de trabajo, lo que

se expresó desde la exposición de motivos, por lo que queda satisfecho el requisito de fundamentación y motivación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo a la presunta violación al principio de legalidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del considerando séptimo, relativo a la presunta ilegalidad de la exposición de motivos. El proyecto propone desestimar el argumento consistente en que la exposición de motivos aparenta la legalidad de la norma bajo el argumento de que una persona puede ser apta para presidir más de una comisión, siempre y cuando lo encomiende el Pleno del Congreso, pretendiéndose que los diputados del Partido Revolucionario Institucional sean quienes presidan todas las comisiones; puesto que la exposición de motivos no es un parámetro o medida de constitucionalidad, sino simplemente contiene las razones de la determinación del órgano legislativo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, relativo a la presunta ilegalidad de la exposición de motivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos

de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación el considerando octavo, relativo a la presunta violación al derecho de igualdad contenido en el artículo 1º de la Carta Magna. El proyecto propone declarar infundado el concepto de invalidez atinente a que se da un trato diferente a una persona bajo una situación jurídica determinada sin mediar procedimiento que así lo legitime, quedando restringidas las garantías de los actores para presidir una comisión legislativa previamente asignada, además de que la norma combatida crea una excepción aplicable en perjuicio de los diputados que no cuentan con mayoría dentro de la Legislatura; en razón de que el derecho a la igualdad es fundamental de los ciudadanos, pero no implica que se pueda trasladar a la actividad legislativa, en este caso, para acceder a presidir una comisión, además de que la integración de esas comisiones la realiza el Pleno, que es el órgano máximo del Congreso del Estado, lo que no va más allá de lo que su ley orgánica prevé, máxime que dicha ley no otorga facultad alguna a los integrantes de las comisiones para nombrar a su propio presidente, como se advierte de su artículo 94, el cual tampoco hace referencia a que los presidentes serán elegidos por pertenecer a determinado partido político o que éste conforme la mayoría de la Legislatura, sino por sus características y experiencia.

El señor Ministro Silva Meza se manifestó de acuerdo con el proyecto y sugirió que se matizara la afirmación categórica contenida en el tercer párrafo de la página veintiuno del proyecto, esto es, que el principio de igualdad es un derecho fundamental que de ninguna manera podría aplicarse o trasladarse a la actividad legislativa.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para indicar, en su tercer párrafo de la página veintiuno que, por regla general, el principio de igualdad es un derecho fundamental que no puede aplicarse o trasladarse a la actividad legislativa.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales advirtió que el argumento de los accionantes también refiere a la vulneración del principio de irretroactividad del artículo 14 constitucional, pues en la página diez del escrito de demanda indicaron que se menoscaba su derecho de presidir una comisión legislativa previamente asignada, dado que se restringiría con la sola decisión del Pleno de Congreso de remover las presidencias a su libre albedrío, además de que la tesis P. XI/2008 prevé que los derechos reconocidos en los artículos 1º, 13 y 14 constitucionales no sólo tienen eficacia normativa en los gobernados, sino también en el ámbito de la libre configuración del legislador al emitir normas que formal y materialmente cumplen las características de la ley. No obstante ello, consideró que no puede alegarse irretroactividad al reglamento en cuestión partiendo de la idea de que los integrantes del Congreso

tienen derechos adquiridos, en virtud de la jurisprudencia P./J. 90/2011 (9a.) de rubro: *“PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TRATÁNDOSE DE SUS LEYES ORGÁNICAS NO PUEDE ALEGARSE, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PARTIENDO DE QUE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL TIENEN DERECHOS ADQUIRIDOS, O BIEN, DE SITUACIONES JURÍDICAS CREADAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR, QUE IMPIDAN UNA REFORMA.”* En este sentido, sugirió que el estudio debería declarar inoperantes estos argumentos de los accionantes.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en favor del sentido del proyecto y con algunas diferencias argumentativas que plasmará en un voto concurrente. Coincidió con el señor Ministro Silva Meza en que no debería afirmarse categóricamente que no es posible tratar un principio de igualdad entre legisladores, sino que, al tratarse de prerrogativas de la representación parlamentaria, el análisis debería centrarse en los principios de representatividad y su conexidad con el de igualdad en un Estado constitucional, esto es, en torno a los derechos de las minorías parlamentarias que garanticen condiciones generales de igualdad en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, con la finalidad de preservar los equilibrios democráticos.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con el proyecto, estimando que podría completarse con el artículo 13 del reglamento en cuestión, el cual dispone que para la integración de las comisiones legislativas, la Comisión de Gobierno tomará en cuenta la pluralidad representada en el Congreso del Estado y formulará las propuestas, con lo cual podría satisfacerse la reserva del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para agregar el estudio de los argumentos de los accionantes, relativos a la vulneración del principio de irretroactividad del artículo 14 constitucional, y declararlos inoperantes con base en la jurisprudencia P./J. 90/2011 (9a.). Respecto de las expresiones de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza y Franco González Salas, recordó que el estudio del artículo 13 del reglamento en combate se efectúa en el siguiente considerando del proyecto en atención a un concepto de invalidez expreso en ese sentido.

Así, respecto del considerando noveno, relativo a la presunta contravención de la norma impugnada con el artículo 13 del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el proyecto propone desestimar el argumento de los accionantes consistente en que dicho artículo contraviene la Constitución, dado que puede dar lugar a una inseguridad jurídica; en razón de que los artículos 12 y 13 del reglamento en cita

deben leerse de manera concatenada, incluso con el capítulo respectivo de esa ley orgánica (artículos 63 a 98), los que establecen que la Comisión de Gobierno, como principal comisión del Congreso del Estado de Aguascalientes, se encarga de las propuestas de presidentes de comisiones tomando en cuenta todos los factores que se transcriben de esas normas, y posteriormente el Pleno del Congreso determina lo conducente.

Modificó el proyecto en el considerando octavo para agregar un preámbulo que remita al estudio concatenado de los artículos 12 y 13 del reglamento impugnado, contenido en el diverso considerando noveno de la propuesta.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo a la presunta violación al derecho de igualdad contenido en el artículo 1º de la Carta Magna, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de algunas consideraciones, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando noveno, relativo a la

presunta contravención de la norma impugnada con el artículo 13 del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que el estudio de la relación entre los artículos 12 y 13 del reglamento impugnado no debería realizarse en un considerando especial, pues los argumentos esgrimidos son inatendibles al no impugnar directamente la constitucionalidad de los preceptos; en todo caso, sugirió que el estudio de este apartado se trasladara, a mayor abundamiento, al considerando octavo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz, pues el argumento de relación de los artículos 12 y 13 es de cuasi legalidad o, al menos, no contiene confronta directa con la Constitución, por lo que debería declararse inoperante.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para declarar inatendible el argumento en estudio y para trasladar el contenido de este considerando noveno al considerando octavo, en calidad de mayor abundamiento, en razón de que no se confrontó directamente la Constitución ni se hizo valer cuestión alguna de seguridad jurídica.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que se trata de un conflicto entre una ley y un reglamento en materia legislativa con características especiales, siendo que el considerando noveno atiende el concepto de invalidez

planteado, relativo a la presunta contravención de la norma impugnada a lo previsto en el artículo 13 del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, por lo que, de cualquier manera, manifestó reserva para formular voto concurrente.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó la duda concerniente a si, de tratarse de un reglamento cualquiera, no uno interior del Congreso, sería analizable en una acción de inconstitucionalidad, expresando muchas reservas por ese análisis. Concordó con determinar que los argumentos son inatendibles y sugirió que se redactara una consideración especial en torno a la naturaleza especial de los reglamentos en sede de autogobierno, puesto que, en los Congresos, en ocasiones no es clara una relación jerárquica, sino en paralelo o diferenciadas.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que, dada la forma en que se impugnó el artículo 12 del reglamento, esto es, en contraste con el diverso artículo 13 y no refiriendo a la ley orgánica, basta con declarar inatendible el argumento. Se manifestó de acuerdo con la decisión de rehacer el considerando octavo con el considerando noveno, ya que éste no implica un tema de constitucionalidad.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas compartió la duda relativa a si la acción de inconstitucionalidad es la vía o no para hacer valer este tema; sin embargo, estimó que se supera el problema con los ajustes realizados.

El señor Ministro Pérez Dayán recalcó que se analiza un contraste entre dos disposiciones del mismo reglamento, siendo que la aclaración pedida por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea requeriría del análisis contra la ley.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea concordó en la sola determinación de que el argumento es inatendible, mas no sobraría una breve reflexión atinente a que, en ocasiones, los reglamentos interiores no son como los tradicionales, aprovechando la oportunidad del estudio a mayor abundamiento.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales advirtió que en las páginas dieciocho a veintidós de la demanda se advierte un argumento respecto de una posible violación al principio de representación democrática, lo cual no está tratado suficientemente en el proyecto.

La señora Ministra ponente Luna Ramos aclaró que sí se contesta, en el sentido de que no se afecta ningún derecho democrático de los diputados, pues los artículos se complementan para indicar el proceso de nombramiento tanto de las comisiones como de sus presidentes. Reiteró que el argumento, al comparar los artículos 12 y 13 del mismo reglamento y no así con la Constitución, resulta inatendible, recordando que el estudio de este considerando noveno pasó, a mayor abundamiento, al considerando octavo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se expresó de acuerdo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, tras el análisis del concepto de invalidez correspondiente de la demanda, apuntó que se trata de un argumento de mera legalidad, por lo que sería pertinente declarar inatendible ese concepto.

La señora Ministra ponente Luna Ramos hizo hincapié en que, por esas razones, se declaró inatendible el concepto y se pasó el estudio del considerando noveno al considerando octavo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la determinación de trasladar el estudio comparativo de los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes al considerando octavo y de declarar inatendible el planteamiento respectivo, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Pardo Rebolledo observó que en el punto resolutivo segundo está incorrectamente plasmada la fecha de la publicación del acto reclamado.

La señora Ministra ponente Luna Ramos corrigió la fecha citada. Así, los puntos resolutivos deberán indicar:

*PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto Número 428, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veinte de noviembre de dos mil trece. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

**IV. 58/2013**

Controversia constitucional 58/2013, promovida por el Municipio de Tijuana, Baja California, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo del mencionado Estado, demandando la invalidez del Decreto 263, mediante el cual se reformaron los artículos 7, 17, 26, 27 y 29 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California; se reformó el artículo 118 y se adicionó el artículo 118 Bis de la Ley de Protección al Ambiente para dicha entidad, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el primero de febrero de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Juan N. Silva Meza se propuso: *“PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la controversia constitucional por lo que hace a la fracción X del artículo 7, la fracción V del artículo 17, la fracción X del artículo 26, la fracción VII del artículo 27 y la fracción VII del artículo 29 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, así como el artículo 118 de la Ley de Protección al Ambiente para dicha entidad federativa. TERCERO. Se declara la invalidez con efectos relativos del primer párrafo y las fracciones IX y XI del artículo 7, el primer párrafo y las fracciones IV y VI del artículo 17, las fracciones IX y XI del artículo 26, el primer párrafo y las fracciones VI y VIII del artículo 27, el primer párrafo y las fracciones VI y VIII del artículo 29 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California así como el artículo 118-BIS de la Ley de Protección al Ambiente para dicha*

*entidad federativa; declaratoria de invalidez que surtirá efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Silva Meza realizó la presentación del asunto. Preciso que el Municipio de Tijuana demandó la invalidez del Decreto 263 citado porque, esencialmente, no se le dio participación en el proceso legislativo. El proyecto propone declarar la invalidez del decreto combatido con efectos relativos, tras sobreseer de oficio en relación con los artículos 7, fracción X, 17, fracción V, 26, fracción X, 27, fracción VII, y 29, fracción VII, de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, así como del artículo 118 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada la cesación de efectos de las normas combatidas, en razón de que fueron reformadas mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.

Propuso someter a la valoración del Tribunal Pleno los considerandos procesales del proyecto, modificando su

orden para quedar: primero, relativo a la competencia; segundo, atinente a la oportunidad; tercero, consistente en la precisión de los actos impugnados; cuarto, alusivo a la legitimación de la actora; quinto, concerniente a la legitimación de los demandados; y sexto, vinculado con la existencia del decreto impugnado.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la precisión de los actos impugnados, a la legitimación de la actora, a la legitimación de los demandados y a la existencia del decreto impugnado, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Silva Meza recordó que el considerando séptimo, relativo a las causas de improcedencia, aloja la propuesta de sobreseimiento a que hizo referencia en la presentación.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena indicó que únicamente debería sobreseerse respecto de los artículos 7, fracción X, 26, fracción X, y 27, fracción VII, de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, no así en cuanto al resto de los artículos,

pues no se dio un cambio normativo de fondo, aclarando que su posición es minoritaria en ese sentido.

El señor Ministro Franco González Salas se expresó en el mismo sentido que el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y adelantó que, obligado por el criterio mayoritario, se pronunciaría en lo conducente.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra de este considerando por la misma razón expresada por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, relativo a las causas de improcedencia, de la cual derivaron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del sobreseimiento en el juicio por lo que ve a los artículos 7, fracción X, 26, fracción X, y 27, fracción VII, de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del sobreseimiento en el juicio por lo que

ve a los artículos 17, fracción V y 29, fracción VII, de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, así como del artículo 118 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

El señor Ministro ponente Silva Meza realizó la presentación del considerando octavo, relativo al análisis de los conceptos de invalidez. El proyecto propone determinar que, dentro del trámite relativo al dictamen en comisiones, éstas se encuentran obligadas a comunicar a los municipios, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión respectiva, a fin de que puedan enviar a un representante sin voto para que forme parte de los trabajos, cuando la iniciativa se refiere a asuntos de carácter municipal, lo que es acorde con la Constitución Estatal. De ahí, se propone la invalidez del decreto combatido, en función de la carencia precisada en el procedimiento constitucional.

El señor Ministro Cossío Díaz, tomando en cuenta lo establecido en los párrafos ochenta y dos y ochenta y cinco del proyecto contenidos en este considerando, se manifestó en contra de los efectos que se imprimen a la invalidez, esto es, únicamente respecto del Municipio de Tijuana, puesto que, al no haberse llevado a cabo el proceso legislativo de manera correcta, esto es, con la participación del municipio,

ello conlleva a la invalidez general de las reformas al contener un vicio que impide la condición de validez de las normas, en términos de su voto emitido en la controversia constitucional 33/2012 del Municipio de Cherán, compartido por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas. En este orden de ideas, anunció voto en contra de los efectos.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz sobre el tema de los efectos generales de una declaratoria de invalidez, no sólo entre las partes pues, como se ha pronunciado en diversas ocasiones, se debe interpretar ampliamente el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, anunció voto en contra de la propuesta de efectos.

Los señores Ministros Cossío Díaz y Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho de formular voto de minoría en cuanto al tema de los efectos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que algunos otros asuntos, como la controversia constitucional 94/2011, se resolvieron en el sentido de que no todas las omisiones afectan la validez de la norma al no impactar en la configuración parlamentaria, sin que implicara una regla general absoluta, pues podría existir alguna circunstancia que pudiera vulnerar la conformación y validez de la norma; sin embargo, en el caso no se impacta esa

conformación parlamentaria y, por ende, no sería motivo de invalidez general de la norma.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena concordó en el señor Ministro Presidente Aguilar Morales, recordando que en la controversia constitucional 94/2011, en la cual votó a favor, se estableció que la intervención que conforme a su Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo se da a los ayuntamientos en asuntos de su competencia, se limita a participar en los trabajos preparativos tendientes a la emisión del dictamen y, aunque esa participación sea de fundamental importancia para la emisión informada del dictamen, no trasciende a la aprobación de la norma porque el dictamen no es sino un documento de trabajo del cual se desarrolla la deliberación, lo que no impacta en la conformación de la voluntad parlamentaria. En estos términos, anunció voto en contra del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en favor del sentido del proyecto, pero por razón de que no se justificó la urgencia para la dispensa de los trámites, pues si bien en el precedente de la controversia constitucional 94/2011 se refería solamente a la intervención del municipio en las diferentes etapas, la violación al procedimiento en cuestión es suficiente para invalidar dicho procedimiento legislativo, como se ha resuelto en diferentes asuntos.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que hay dos formas en que un municipio puede impugnar los procesos legislativos: 1) cuando la Legislatura del Estado ha invadido

las competencias exclusivas del municipio en términos del artículo 115 constitucional, y 2) por una violación al procedimiento legislativo por parte de la Legislatura del Estado, como en el caso, en el cual se dispensó el anuncio a los municipios, cuando menos con cinco días de anticipación, en el trámite relativo al dictamen en comisiones, para que se enviara a un representante sin voto para que tomara parte en los trabajos. En ese aspecto, consideró que se trata de una violación que trasciende a las condiciones de emisión de las normas, lo que no guarda relación con la competencia del municipio, sino con la validez general de la legislación, retomando su voto en la controversia constitucional 33/2012 del Municipio de Cherán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta minutos y reanudó la sesión a las trece horas con quince minutos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó a favor del proyecto pues, a pesar de la cita del precedente de la controversia constitucional 94/2011 en el párrafo último de la página treinta y uno del proyecto, el caso que motivó esa controversia se distingue porque los ayuntamientos sí tuvieron intervención al inicio del proceso legislativo y fue hasta la etapa de las observaciones en donde no se les llamó para la respectiva intervención, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

El señor Ministro Pérez Dayán expresó su conformidad con el proyecto en razón de que, aun cuando la legislación

estatal permite la dispensa del trámite de comunicación a los ayuntamientos para que tengan voz en la discusión en la comisión respectiva por motivos de urgencia, en el caso concreto, de las versiones estenográficas respectivas no se desprende ninguna expresión concreta de urgencia, sino únicamente algunos diputados expresaron cuestiones atinentes a los procesos de contaminación creciente que experimentaban algunas ciudades, a la importancia de legislar lo atinente a los verificentros y a los registros de alta contaminación, entre otras, por lo que consideró que no resultan suficientes como justificación para esa dispensa. Sugirió que se añadiera un párrafo con estas referencias para concluir que no existió justificación de la urgencia, aunque se pudiera deducir de algunas intervenciones de los diputados.

La señora Ministra Luna Ramos se expresó en favor del sentido del proyecto y se apartó de algunas consideraciones, pues se debió valorar la urgencia no sólo en lo relativo a la dispensa de los trámites propiamente, sino en lo que concierne a la inobservancia del trámite específico de la intervención del municipio, que implicó dejar de escuchar a una parte interesada dentro del procedimiento.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en contra del proyecto en razón de la deferencia que debe guardarse respecto de las facultades de los Congresos locales, estimando que, en el caso concreto, se sometió a la consideración del Pleno del Congreso la petición de

dispensa de estos trámites y nadie participó en el debate, además de que no advirtió violación de competencia alguna del municipio en materia de tránsito en términos del artículo 30 de la Constitución Estatal, puesto que la Legislatura reguló algo para todo el Estado, para lo cual el Congreso local tiene facultades, por lo que no se viola el artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal, al margen de que dicha materia se ha discutido varias veces por este Alto Tribunal y no se han fijado criterios.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales indicó que, en términos del artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, por lo que el Congreso estuvo en falta al no haber llamado al municipio al procedimiento.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando octavo, relativo a la presunta violación al derecho de igualdad contenido en el artículo 1º de la Carta Magna, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz en contra de los efectos relativos, Luna Ramos en contra de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas en contra de los efectos relativos, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Franco González Salas votaron en contra y anunciaron voto de minoría. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. Los señores Ministros Cossío Díaz y Sánchez Cordero de García Villegas anunciaron voto de minoría por lo que se refiere a los efectos de invalidez.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves cuatro de junio de dos mil quince, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".